

11ª SESION EXTRAORDINARIA DEL 23 DE ENERO DE 1891

PRESIDENCIA DEL DOCTOR BENJAMÍN ZORRILLA

SUMARIO—Asuntos entrados—Consideración de las modificaciones introducidas por el senado en los proyectos de ley sobre empréstitos externos, derechos de importación y exportación, patentes e impuestos internos—Consideración de un proyecto de ley sobre rescisión del contrato con la empresa de obras de salubridad de la capital—Consideración de un proyecto de ley autorizando una rebaja proporcional en los sueldos de los empleados de la administración.

PRESENTES

—
Arias (J. I.)
Balestra
Barraza
Basualdo
Beracochea
Castaño
Cáceres (A.)
Cáceres (J. M.)
Cantón
Castro
Castillo
Centeno
Domínguez (C.)
Gallo
García
Gilbert
Giménez
Giménez Beltrán
Godoy
Gonnet (M. B.)
Gonnet (L. M.)
Lagos (O.)
Lalanne
Lársen del Castañón
López
Magnasco
Malbrán
Mallea
Mansilla
Meyer
Molina
Novaro

En Buenos Aires, á 23 de enero de 1891, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados anotados al margen, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 3 y 30 p. m.

ACTA

—Se lee y aprueba sin observación la de la sesión anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El poder ejecutivo nacional.

Buenos Aires, enero 21 de 1891

Al honorable congreso de la nación.

La rescisión del contrato de arrendamiento de las obras de salubridad de la capital es desde hace tiempo una verdadera aspiración pública, y el poder ejecutivo ha consagrado á este asunto un interés especial, buscando los medios más adecuados para satisfacer el voto de la opinión y hacer que las referidas obras vuelvan al dominio de la nación y sean administradas por ella

Olmedo
Olmós
Padilla (V.)
Parera
Panclo
Pellegrini
Ramos Mejía
Robert
Ruiz
Sarmiento
Torres (Gmo.)
Torres (Gregorio)
Villagra
Victorica
Villanueva
Zorrilla

AUSENTES

Con licencia

Alba Carreras
Vázquez

Con aviso

Bosch
Bruchmann
Campillo
Ceballos
Dantas
Echenique
Espinosa
Iriondo
Lagos (H.)
Obligado

El poder ejecutivo ha encontrado, felizmente, en los capitalistas ingleses con quienes tiene pendientes otros arreglos financieros, que vuestra honorabilidad conoce, una favorable acogida para la ejecución de sus proyectos; y las negociaciones iniciadas con ese objeto se hallan á punto de ser terminadas, estando aceptadas las bases generales, que en su parte principal son las siguientes:

Quedará rescindido el contrato de arrendamiento.

La nación pagará á la empresa arrendataria la cantidad de diez y seis millones de pesos como devolución de las sumas entregadas por ésta al tesoro nacional con sus intereses correspondientes.

La empresa terminará todas las obras comprendidas en el contrato de arrendamiento y las de ampliación cuya ejecución solicitó después, y en virtud de lo cual se reconoció su capital en la cantidad de cuarenta millones de pesos. El costo de estas obras se calcula en once millones de pesos, que recibirá la empresa.

Las obras concluidas serán

Padilla (M.)
Rueda

Sin aviso

Albarracín
Arias (F.)
Aguirre Silva
Alvarez Prado
Dominguez (J. A.)
González
Herrera
Leiva
Maciá
Mendoza
Obejero
Paz
Posse
Quesada
Rodriguez
Tapia
Tejerina
Varela Ortiz
Videla
Zapata

inmediatamente entregadas á la nación, á fin de que ésta tome á su cargo el servicio de las mismas y pueda percibir la renta correspondiente. En cuanto á las obras pendientes, la entrega tendrá lugar conforme termine su ejecución.

Para llevar á cabo la rescisión en las condiciones fijadas, la nación emitirá treinta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos en títulos de deuda externa, que serán recibidos al ochenta por ciento de su valor nominal, y que devengarán cinco por ciento de interés y uno por ciento de amortización acumulativa, por sorteo y á la par.

El servicio de este empréstito exigirá de la nación durante treinta y siete años un desembolso anual de dos millones de pesos, que podrán obtenerse fácilmente del producto de las obras, mientras que por el contrato de arrendamiento la empresa tendrá que recibir del municipio cuatro millones de pesos anuales durante treinta y nueve años, puesto que está autorizado á obtener una utilidad de diez por ciento sobre un capital de cuarenta millones de pesos.

Resulta, por consiguiente, que la rescisión del contrato de arrendamiento en las condiciones proyectadas, importará una economía de cincuenta por ciento para la nación y si ésta llega á percibir de las obras de salubridad la misma renta que se proponía obtener la empresa, tendrá un sobrante anual de dos millones de pesos que podrán ser empleados en beneficio del mismo municipio, si no se prefiere bajar proporcionalmente las cuotas que deben abonar los propietarios.

Como queda indicado al principio de este mensaje, están ajustadas las bases generales de la rescisión, y sólo se hallan pendientes algunas resoluciones de detalle; pero siendo posible que pasen algunos días antes de que la negociación quede totalmente concluida, el poder ejecutivo desea que no se clausuren las presentes sesiones extraordinarias sin que V. H. tome la participación que le corresponde en este importante asunto, y somete en consecuencia á su consideración el adjunto proyecto de ley.

Dios guarde á V. H.

C. PELLEGRINI.
JULIO A. ROCA.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1º Autorízase al poder ejecutivo para escindir el contrato de arrendamiento de las obras

de salubridad de la capital, bajo las siguientes condiciones:

1ª La nación pagará la cantidad de dieciséis millones de pesos á la empresa arrendataria, como devolución de las sumas entregadas por ésta al tesoro nacional con sus intereses correspondientes.

2ª La empresa terminará todas las obras comprendidas en el contrato de arrendamiento y las de ampliación cuya ejecución solicitó después, y en virtud de lo cual se reconoció su capital en la cantidad de cuarenta millones de pesos. El costo de estas obras se calcula en once millones de pesos que recibirá la empresa.

3ª Las obras concluidas serán inmediatamente entregadas á la nación, á fin de que ésta tome á su cargo el servicio de las mismas y pueda percibir la renta correspondiente. En cuanto á las obras pendientes, la entrega tendrá lugar conforme termine su ejecución.

Art. 2º A los efectos expresados en el artículo anterior, queda igualmente autorizado el poder ejecutivo para emitir treinta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos en títulos de deuda externa, que serán entregados al ochenta por ciento de su valor nominal, y que devengarán cinco por ciento de interés y uno por ciento de amortización acumulativa, por sorteo y á la par.

Art. 3º El producto de las obras de salubridad quedará afectado al servicio de este empréstito.

Art. 4º Comuníquese, etc.

Roca.

(A la comisión de hacienda.)

—El señor presidente de la cámara de diputados de la provincia de Entre Ríos remite el actº de la insaculación de los ciudadanos que compondrán las mesas receptoras de votos, en la próxima elección de un diputado nacional.

(A la comisión de poderes.)

—El señor presidente del senado comunica la sanción definitiva del proyecto reformando la ley de sellos.

(Al archivo.)

—El mismo remite modificados los proyectos de ley sobre derechos de importación, patentes, impuestos internos y derechos de exportación.

—El mismo remite en revisión el proyecto de ley declarando expropiable el terreno necesario para construir un faro en Punta Médanos.

—El mismo remite modificado el proyecto de ley autorizando al poder ejecutivo para contraer un empréstito en el exterior.

DESPACHO DE COMISIONES

La de presupuesto se ha expedido en el proyecto de descuento general en los sueldos de los empleados.

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

Sr. Presidente—La cámara resolverá si se ha de tomar ó nó inmediatamente en consideración las modificaciones introducidas por el senado en los diversos proyectos que ha remitido.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Para hacer una moción tendente á que despachemos en el más breve lapso de tiempo posible todos los asuntos que están sometidos á nuestra consideración.

Hago moción para que la cámara se declare en sesión permanente, al objeto indicado.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Se va á votar si la cámara se declara en sesión permanente hasta terminar todos los asuntos que tiene á su consideración y estudio.

Sr. Olmedo—Pero hay muchos que no están en consideración en este momento.

Sr. Presidente—Por eso he dicho: á su consideración y estudio.

Sr. Olmedo—¿También están comprendidos los que no tienen despacho de comisión?

Sr. Presidente—Todos.

—Se aprueba la moción.

Sr. Presidente—Se va á entrar á considerar las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto de ley que autoriza la negociación de un empréstito externo de 75 000,000 de pesos.

Sr. Secretario Ovando—La primera modificación consiste en agregar al artículo 4º, después de la palabra *nación*, la frase: *ó que tome á su cargo, en virtud de la ley núm. 2765*.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Mansilla—Pediría que se leyera la ley á que se refiere la enmienda del senado.

—Se lee:

«Artículo 1º En caso de que algunas de las provincias no pudiera atender el servicio de su deuda externa, queda autorizado el poder ejecutivo para tomarla á cargo de la nación, previo convenio que celebrará con la provincia respectiva»

Sr. Mansilla—Voy á votar con mucho gusto por la enmienda.

—Se vota y es aprobada.

Sr. Secretario Ovando—La otra modificación consiste en intercalar en el artículo 6º, después de la palabra *bancarios*, la frase: *prescripto por la ley complementaria de aduana, para el presente año de 1891*.

—Se aprueba también.

Sr. Presidente—Se va á pasar ahora á considerar las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto reformando la ley de aduana.

Sr. Secretario Ovando—El honorable senado ha introducido como art. 2º el siguiente: *El ganado mayor que se exporte en pie pagará un peso por cabeza, exceptuándose el que se exporte cabos á fuera y ultra Cordillera*.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Molina—Pido la palabra.

Yo creo, señor presidente, que la honorable cámara debe insistir en su sanción anterior, y no aprobar este impuesto absolutamente inconstitucional, y que es inconveniente, como se ha demostrado en esta misma cámara.

Es inconstitucional, señor, porque nosotros no podemos exonerar de derechos al ganado que se exporta ultra-Cordillera é imponer al ganado que se exporta al Paraguay, al Brasil ó á la República Oriental. No podemos absolutamente crear preferencias para un punto de exportación sobre otros; no podemos dar franquicias á los que exportan por la Cordillera sobre los que exportan por los puertos de Entre Ríos, por ejemplo, porque sería destruir completamente el sistema económico que marca la constitución.

Por otra parte, no sé á qué respondería este sistema de restringir la exportación de uno de nuestros productos, que tenemos en abundancia y que deja anualmente un excedente considerable sobre las existencias del año anterior.

Creo, señor, que esta medida es además inconveniente bajo el punto de vista de las cordiales relaciones que mantenemos con los estados vecinos, porque aparece del contexto de la ley que la exportación á esos países, que son los únicos que importan nuestro ganado, es mirada con disfavor por la República, desde que concedemos á Chile la libre exportación á su territorio de esta materia que es necesaria para los consumos y se la negamos, por ejemplo, á la República Oriental.

De manera, pues, que ni bajo el punto de vista de la política internacional conviene sancionar una disposición semejante.

Yo creo que la buena política económica, entre nosotros, sería defendernos en esta parte del mundo, buscando el auxilio de las naciones hermanas, estableciendo más tarde, por tratados, la libre importación recíproca de los productos de fabricación nacional de las naciones americanas. Pero mientras estas bases generales ó esta aspiración no se realiza, me parece que es pru-

dente y conveniente no establecer impuestos á la exportación de ciertos productos que van á determinadas naciones americanas, cuando no se establece esos mismos impuestos para otras.

Por esta razón, no he de aceptar, por mi parte, la sanción del senado.

Sr. Magnasco—Pido la palabra.

Yo creía, señor presidente, que eran suficientes las consideraciones que se habían aducido en el debate anterior, sobre este mismo punto.

Recuerdo, y la honorable cámara recordará también, que uno de los diputados por Santa Fe hizo moción para que se estableciera el derecho de un peso por cabeza á la exportación del ganado en pie, y que yo, en esa misma sesión, modifiqué y amplifiqué la moción de' señor diputado, en vista de las consideraciones que entonces tuve el honor de exponer á la honorable cámara.

Pero veo que ahora uno de los señores diputados que entonces hizo oposición á la moción, que hoy viene introducida en el proyecto del honorable senado en forma de artículo, ha repetido, más ó menos las mismas consideraciones de entonces, en una forma—si me permite el señor diputado—más discreta y tal vez un poco más estudiada.

Esta diferencia en el establecimiento de contribuciones, en lo que se refiere á las naciones extranjeras, no puede, á mi juicio, servir de base absolutamente para que nosotros proscribamos una medida tan conveniente, tan necesaria, tan justa y que reposa, sin duda, en principios de verdad incuestionable.

Se habló, en sesiones anteriores, y creo que el mismo señor diputado por la capital fué el que trajo á colación una consideración histórica... sin duda alguna, era un anacronismo....

Sr. Mansilla—Yo fui.

Pero es lo mismo. Porque pienso siempre, no sé por qué combinación, del mismo modo que el señor diputado.

Sr. Magnasco—No me extraña que el señor diputado Mansilla haya traído á colación esa expresión histórica, porque, por más que sea un hombre de tanto talento y cuya ciencia general reconozco, debe alguna vez incurrir, siquiera por casualidad, porque esto es fatal en la explicación de los fenómenos científicos á cuyo estudio uno no se ha dedicado especialmente, tratándose del derecho, por ejemplo, en la explicación, decía, con arreglo á aquella estrofa: «Perora el abogado sobre marciales lides; y el sastre busca el medio de elaborar confites».

El señor diputado no está preparado sin duda en derecho, ni tiene la suficiencia del detalle.

Por eso yo quería atribuir al señor diputado Molina, y creo habérsela oído á él, esa expresión, puesto que él tiene la patente de abogado recibido en la primera universidad de la república.

Voy á continuar, señor presidente.

Uno de los señores diputados por la capital ha traído á colación esa expresión de *derechos diferenciales*.

Pero yo nunca he conocido, en el estudio del derecho internacional, los derechos diferenciales como objeto del derecho de las naciones.

No conozco derechos diferenciales internacionales, sino en el sistema aduanero, en el sistema rentístico de un mismo país.

Hay derechos diferenciales cuando en una aduana no se impone las mismas contribuciones que en otra aduana del mismo país; hay derechos diferenciales cuando la base de la contribución no es igual en una y en otras aduanas del mismo país. Pero inter naciones, repito, no existen los derechos diferenciales.

Y es este mismo argumento, traído en otra forma por el señor diputado por la capital, en la presente sesión, el que yo clasifico de anacronismo y, hasta cierto punto, si me lo permiten el señor diputado y la honorable cámara, con sus puntos de ridículo.

He expuesto, en las sesiones precedentes, las cifras, los datos á lo menos, de la industria saladeril de la provincia que tengo el honor de representar, así como las consideraciones generales y concretas pertinentes al caso; y pienso que la honorable cámara debe meditar sobre este punto, muy importante. No sancionando este artículo que propone el honorable senado, no solamente se afecta la industria principal de la provincia que represento, sino también la de una buena parte de las demás provincias argentinas.

Esta es, señor presidente, una cuestión de derecho y de conveniencia, una cuestión de justicia, pero también de utilidad constitucional y económica; una cuestión de igualdad y de protección, al mismo tiempo; sin contar también que el artículo introducido por el honorable senado responde al pensamiento general dominante en el plan propuesto por el poder ejecutivo, y sancionado ya por ambas cámaras del congreso.

En virtud de estas consideraciones, espero que si es verdad que he sufrido, en sesiones anteriores, una derrota, muy honrosa para mí, la honorable cámara tendrá

la deferencia de no derrotarme una segunda vez. (*Risas*.)

Sr. Molina—Pido la palabra.

Debò agradecer, ante todo, las cultas palabras con que el señor diputado se ha dignado contestar las pocas que yo pronuncié con la pretensión simplemente de fundar mi voto.

Le agradezco mucho que después de clasificar á su manera la frase *derechos diferenciales*, haya elegido, no un general, sino un abogado, que, es de suponer, tiene conocimientos constitucionales suficientes, para atribuirle la paternidad de la frase.

A parte de que no sé que nada tenga que hacer este recuerdo histórico del señor diputado, la frase *derechos diferenciales* no estaría, históricamente, bien aplicada; pero, gramatical y constitucionalmente, está perfectamente aplicada.

Por qué? Por la misma razón que el señor diputado daba.

Decía: No hay derechos diferenciales cuando se trata de nación á nación, hay derechos diferenciales cuando se trata de un puerto y de otro de la misma nación.

Pero, precisamente, es el caso: los puertos de Concordia, Monte Caseros, etc., son puertos de la nación argentina, y la ganadería que se exporta por allí pagará derechos, mientras que la que se exporta por Buenos Aires, para cabos á fuera, de puertos argentinos también, no pagará derechos.

Y ahí tiene el señor diputado, según su definición, lo que es derecho diferencial.

Sr. Magnasco—Muy distinta cosa!

En todas las aduanas de la república se paga el mismo derecho.

Sr. Molina—He escuchado al señor diputado con mucha atención y....

Sr. Magnasco—Dispénsese.

Sr. Molina—No la he empleado, pero hago mía la frase del señor diputado por la capital, general Mansilla. No he empleado la frase *derechos diferenciales* en el sentido histórico. Es un recuerdo que no hay para qué suscitar y que no tiene aplicación ni objeto en debates de esta naturaleza.

La frase *derechos diferenciales* se ha traído precisamente para hacer notar á la honorable cámara que con esta sanción iba á crear diferencias entre los puertos de exportación de un mismo territorio.

Esto, señor, y la solemne promesa consignada en una ley de la nación que libra de todo derecho de exportación al ganado en pie durante diez años, me parece que dan motivos más que suficientes para que la cámara, que no debe proceder por deferencias, cumpla con su deber, manteniendo ante todo el imperio de la constitución.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Agradezco á mi joven y distinguido colega, el señor diputado por la provincia de Entre Ríos, el elogio que me ha dirigido; pero ya que él ha reconocido mi ciencia y mi competencia en general, voy á permitirme, no darle una lección, porque él es cateadrático, sino argüirle con la historia: que la diferencia que hay entre un militar y un abogado, es que, generalmente, un militar sabe más que un abogado! (*Risas*.)

Y como yo creo que lo más conveniente es un argumento *ad-hominem*, le arguyo con el señor diputado Beracochea, que, después de colgar la espada, se dedicó al estudio del derecho; y supongo que, si no reconoce mi competencia, por lo menos reconocerá la de ese señor diputado: y, en esa parte, creo que yo salgo triunfante en mis argumentaciones.

Respecto á derechos diferenciales, voy á decirle que no sé en qué tratados, de los que es necesario estudiar para recibirse de abogado, he leído que las naciones establecen tales derechos diferenciales internacionales.

En vez de ser la excepción, es la regla.

Los vinos españoles no pagan, en Francia, los mismos derechos que los vinos italianos; los relojes de Suiza no pagan, en Francia, los mismos derechos que los relojes belgas.

¿Por qué? Porque las naciones establecen tratados de comercio, conviniendo medidas recíprocas; y de ahí las tarifas diferenciales.

Lo que tiene de odioso todo derecho diferencial, es que trae un origen feudal.

Ya ve el señor diputado como no es necesario saber griego ni latín, ni tener diploma de abogado, sea este limpio ó sucio (*Risas*), para conocer un poco cual es la filiación de los derechos diferenciales, que, como una herencia del feudalismo, vinieron después á ser derechos interprovinciales.

Así es que, si hubiera sabido que el señor diputado me iba á hacer un elogio hasta el punto de haber estado casi inclinado á cubrirme el rostro con una pantalla que busqué, pero que no tenía,—me habría guardado muy bien de reivindicar el antecedente de que fui yo quien pronuncié la frase *derechos diferenciales*, de ominosa memoria entre nosotros, porque esos derechos fueron causa de que se derramara una cosa que necesitábamos economizar mucho, quizá más que el tiempo: la sangre argentina....

Pero, al fin, la sangre suele ser fecunda, pero el tiempo que se pierde.... fecundo, ¿para qué, señor presidente?

Digo, pues, que si esta discusión no debiera terminar aquí, yo desearía que terminara; y entonces, temeroso de que la réplica

de mi honorable colega me anonade, le voy á rogar que no me conteste.

Sr. Magnasco—Ya está contestado por el señor diputado mismo.

Sr. Presidente—Sírvase leer, señor secretario, la enmienda introducida por el honorable senado.

—Se lee nuevamente.

Sr. Gilbert—Propongo que se vote por partes.

Sr. Molina—No se puede votar por partes.

Sr. Mansilla—Es imposible. No se puede hacer otra cosa que aceptar ó rechazar la modificación.

—Se vota si se acepta la modificación del senado, y resulta negativa.

Sr. Secretario Ovando—En el proyecto de reformas á la ley de aduanas, en la parte referente á la importación, el honorable senado ha modificado el art. 2º.

La cámara de diputado lo había sancionado como sigue: «En ningún caso podrá exceder el tipo del oro, para las operaciones aduaneras, de 300 por ciento».

El senado dice: Autorízase al poder ejecutivo para fijar el tipo del oro, en las operaciones de aduana, con una tolerancia de 10 por ciento sobre el precio de plaza».

—Se aprueba la modificación del senado por afirmativa de 26 votos.

Sr. Secretario Ovando—En el artículo 3º, la honorable cámara dice: «Créanse los siguientes derechos adicionales, *el producto de los cuales* se destina exclusivamente á aumentar,» etc.; y, el honorable senado modifica el artículo en esta forma: «Créanse los siguientes derechos adicionales, *cuyo producto* se destina exclusivamente á aumentar el fondo de la caja de conversión.»

Es una corrección de forma.

Sr. Mansilla—No creo que sepan más gramática allá que acá.

—Se vota la modificación y es aprobada.

Sr. Secretario Ovando—Al final del mismo artículo, el honorable senado agrega: «debiendo el poder ejecutivo retirar anualmente de la circulación la suma de 15 millones de pesos.»

—Se aprueba también esta modificación.

Sr. Secretario Ovando—Agrega co-

mo inciso 13 del mismo artículo: «Por cada kilo de fósforos de cera, 30 centavos.»

—Se acepta la modificación.

Sr. Secretario Ovando—Introduce como inciso 14: «Por cada kilo de fósforos de palo, 15 centavos.»

Sr. Castro—¿Cuál era el impuesto fijado por esta cámara?

Sr. Gilbert—La cámara no puso impuesto al fósforo de palo, porque es el que consume el pobre.

Sr. Castro Yo voy á votar en contra, por tratarse de un artículo de primera necesidad.

Sr. Balestra—Le acompañaré.

Sr. Mansilla—Pero vamos á tener que volver al tiempo de la pajueta! (*Risas*).

Sr. Castro—¿Cómo vamos á privar de este recurso al pobre, cuando ya no se sabe como vivir!

A todas luces, es injusto.

—Se rechaza esta modificación.

Sr. Secretario Ovando—Modifica la redacción del inciso 15.

Esta cámara sancionó: «Los medicamentos compuestos, en general, pagarán un derecho adicional de 25 por ciento *ad valorem*.»

El senado ha sancionado: «Las especialidades farmacéuticas, en general, pagarán un derecho adicional de 25 por ciento *ad valorem*.»

—Se acepta la modificación.

Sr. Secretario Ovando—Modifica el artículo 5º.

La cámara de diputados dice: «Quedan derogados los incisos 1º, 2º y 3º del art. 11 de las ordenanzas de aduana vigentes.»

El senado dice: «Deróganse los incisos 1º, 2º y 3º del art. 11 de las ordenanzas de aduana, quedando vigentes solo para las receptorías de Formosa y Posadas.»

Sr. Molina—¿Quiere leer el señor secretario los artículos relativos de las ordenanzas?

Sr. Centeno—Son los artículos que autorizan el despacho directo.

Sr. Molina—No insisto.

—Se lee nuevamente la modificación.

Sr. Presidente—Se va á votar.

Sr. Olmedo—Pero ¿qué es lo que dicen las ordenanzas?

Sr. Presidente—El señor diputado

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

Molina, que había pedido la lectura, desistió. Por eso no se ha hecho.

—Se lee:

•Art. 11. Las receptorías marítimas son hábiles: 1º Para la introducción en cualquier buque mercante de mercancías de toda especie, para retornarlas ó trasbordarlas con destino al extranjero ó á otras aduanas ó receptorías de la República y para despacharlas al consumo del mercado. 2º Para importar de tránsito de una aduana marítima de la nación, efectos extranjeros, destinándolos como los entrados directamente del extranjero. 3º Para introducir por cualquier buque mercante efectos extranjeros tomados de permanencia ó trasbordo en otra receptoría nacional, y destinarlos como introducción directa del extranjero.»

Sr. Olmedo—Y ¿la razón de esta excepción que se quiere hacer en favor de Formosa y Posadas?

Sr. Presidente—Si no se pide la palabra, se votará.

—Se rechaza la modificación,

Sr. Centeno—Pido la palabra.

La cámara ha resuelto negativamente este punto, sin duda á causa de no haber un solo diputado que dé los antecedentes de esta excepción hecha por el senado.

Acabo de recogerlos, y he tomado la palabra con el objeto de llamar la atención de la honorable cámara sobre este punto y pedirle que reconsidere lo que acaba de votar.

En el senado, según me lo acaba de manifestar el señor senador Rojas, se consideró que había conveniencia en hacer la excepción en favor de estos puertos, á consecuencia de que si se suprimía el despacho directo de estas receptorías, se mataría un comercio importante que hoy existe entre dichos puertos y el Paraguay, principalmente.

Como se comprende, señor presidente, quitando esa franquicia que hoy tienen los puertos de Posadas y Formosa, todos los despachos tendrían que hacerse por las aduanas principales de Buenos Aires y Rosario, y sería imposible que los productos del Paraguay vinieran á tan lejanos centros con tal objeto.

Entonces, se causaría un perjuicio á esos puertos, sin motivo alguno, si se les incluyera en la prohibición del despacho directo.

Estos son los antecedentes que dió el señor ministro de hacienda ante el senado, y en virtud de los cuales aquella honorable cámara sancionó la excepción.

Si esta cámara considera que son atendibles las razones que predominaron en el se-

nado sobre este punto, yo formularía moción de reconsideración en este caso, con el objeto de que aceptáramos la modificación hecha.

Sr. Presidente—Los que apoyen la moción de reconsideración se servirán ponerse de pie.

—Se pone de pie un número suficiente de diputados.

—Se vota si se acepta la modificación en discusión, y es aprobada.

PATENTES

Sr. Secretario Ovando—El proyecto de ley de patentes también ha sido modificado por el honorable senado.

En el art. 1º, inciso 1º, ha suprimido las palabras y respectivas, esta frase: «*cuya clasificación hará el poder ejecutivo, teniendo en cuenta el capital efectivo y respectivo de cada una*», tratándose de las compañías de seguros.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Gilbert—Recuerdo que en las comisiones de hacienda y de presupuesto se discutió ese artículo, y se puso expresamente esa palabra para aclarar más el pensamiento que él comprendía, aun cuando aparentemente parece un poco redundante la redacción.

Repito: esa palabra se ha puesto deliberadamente.

—Se vota la modificación en discusión y es rechazada.

Sr. Secretario Ovando—Esta honorable cámara sancionó el inciso 7º así: «Los hipódromos sin excepción, las casas de remates, etc., pagarán una patente de 50.000 pesos.»

El honorable senado incluye los frontones.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Castro—Alguna vez me había de dar razón el honorable senado!

Pido la palabra.

Es claro, pues! En esos frontones se juega más que en las carreras y que en todos los demás centros de juego, porque allí existe también el *sport*!

En una palabra: ahí se descamisán, como decía en una sesión anterior.

Son centros de corrupción á donde va la juventud á pervertirse, dominada por ese afán del juego.

Porque, señor presidente, no es un juego para divertirse. No, señor. A esos centros no se va á ejercitar las fuerzas físicas, á adquirir el desarrollo muscular, á conseguir agilidad.

No! son centros donde se pervierten las ideas y los sentimientos,

Y consecuente con mis ideas, he de votar en favor de la modificación introducida por el honorable senado.

Sr. Gilbert—Pido la palabra.

Como tuve ocasión de informar á nombre de la comisión, el pensamiento de ésta no es que no paguen patente los frontones. Es que ya están gravados los frontones con una patente de 50.000 pesos.

La comisión ha querido dejar esta patente como renta de la municipalidad de la capital.

No es, pues, el pensamiento de la comisión que estos frontones no paguen impuestos. Lejos de eso: ha establecido el impuesto que deben pagar todas las casas donde se venden boletos de "apuestas mutuas sobre el juego de los frontones.

Estos antecedentes fueron los que determinaron á la cámara á aceptar el despacho de la comisión, en esta parte.

Ahora, ¿hay alguna razón atendible para sacar este recurso á la municipalidad, modificando al mismo tiempo la ley orgánica que ha establecido que los derechos que paguen los frontones sean renta municipal?

Me parece que no, señor.

Al contrario, teniendo en cuenta las observaciones del señor diputado por Córdoba relativas á la inmoralidad de los frontones, conviene dejar á la municipalidad con la renta y con todas las facultades sobre esos establecimientos, para evitar que en vez de ser casas higiénicas se conviertan en centros de corrupción.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Las empresas de frontones están discutiendo con la municipalidad este punto de los impuestos, negándole el derecho que tiene para imponerles; y, por lo tanto, es muy probable que ese impuesto se haga ilusorio.

Sin duda, lo que el honorable senado ha querido, es que no se haga ilusorio el impuesto y que se pague á la nación.

Y sería sensible que estos establecimientos escaparan á la acción de las leyes de impuestos.

Por otra parte, es cuestión ardua, que aun no está resuelta en principio, la de si es municipal ó nacional este impuesto. ¿Para qué vamos á entrar ahora en esta discusión de principios?

Es preferible mil veces que el honorable congreso diga que los frontones pagarán una patente de 50.000 pesos, y que las empresas vengán á discutir ante el gobierno nacional y no ante la municipalidad.

De esta manera quedará definido el punto. Es un impuesto justo y necesario.

Sr. Beracochea—Pido la palabra.

El señor diputado por Córdoba ha dado como una razón inductiva de la opinión que se supone favorable al proyecto del senado, la de que en los frontones se juega, y que se juega en proporciones alarmantes.

La comisión no ha dicho otra cosa; y tan no ha dicho otra cosa, que por primera vez en este recinto, se ha sabido por uno de los miembros de la comisión hasta qué cifra alcanzan las apuestas que se hacen en los frontones.

El señor diputado por Entre Ríos, miembro informante sobre esta ley, recordó los datos estadísticos del señor Martínez, sorprendiendo á la cámara las sumas fabulosas que se juegan en los frontones.

Así es que puede decirse que el despacho de la comisión también tiene como uno de sus objetivos, poner un dique á esta pasión del juego.

Ahora, se dice que las empresas de los frontones están discutiendo á la municipalidad el derecho para imponerles una patente.

El hecho es rigurosamente cierto, como ya tuve el honor de adelantarlo á la cámara.

Pero ¿cuál es la razón inductiva de la resistencia de los frontones?

Es esta, que parece que el señor diputado ha olvidado que, por la ley de patentes nacionales, están gravados. Y por eso arguyen: En la delegación que el congreso ha hecho en la municipalidad para imponer, no se involucra la facultad de imponer á los frontones; porque, si estuviera involucrada, la ley nacional no nos hubiera gravado. La mente del congreso no puede ser—porque eso sería injusto—gravar con dos impuestos una sola cosa, un solo negocio.

Es por eso que los frontones se resisten á pagar á la municipalidad. Dicen: Hay evidente error, hay evidente injusticia, una transgresión de la ley en que la municipalidad tenga establecido un impuesto sobre una cosa que ya está impuesta por la nación en la ley de patentes.

Esta es la razón inductiva de la resistencia.

En este estado de cosas ¿qué sucede? Que ni cobra la nación ni cobra la municipalidad.

Los señores abogados y los que no son abogados saben, porque es un punto simple de procedimiento, que en estos litis lo que se hace es consignar el precio de la diferencia, precio que jamás llega al acreedor ó presunto acreedor hasta que fenece el pleito.

Y bien: ni percibe la nación, ni percibe la municipalidad; tenemos una cuestión en los tribunales; y si insistimos en dejar en la

ley de patentes, como en el año anterior, este impuesto, sucederá que los pleitos ya existentes por el impuesto del año que ha fenecido, volverán á renovarse en el año que empiece.

Señor: yo habría aceptado, cuando se trató por primera vez este punto, y creo que lo propuse á la cámara, que la ley de patentes gravara á los frontones, pero á condición de que se dijera que no podría hacerlo la municipalidad. Porque, de otra manera, con nuestro silencio en presencia de los hechos producidos, que acabo de relatar, habríamos venido á prestar nuestra aquiescencia á una de las injusticias más flagrantes que puede cometerse, en mi opinión; es decir, gravar una cosa y dejar facultad á una entidad que, si no depende directamente del congreso, es una emanación de él, para gravarla en seguida.

No, señor. Yo creo que los frontones deben tener impuesto, pero que debe gravarse una vez.

Se dice que hay *sport*. Es cierto, señor, según se me ha informado, existe lo que se llama *sport*, es decir, una localidad especial donde se vende boletos á tales ó cuales jugadores, así como en el hipódromo se vende boletos á tales ó cuales caballos. Pero el despacho de la comisión y la sanción primitiva de la cámara de diputados, tenían en cuenta esto, y por eso decían: «las casas de *sport* pagarán una patente distinta de aquella que grava los frontones.»

Si en el mismo local de los frontones hay esa casa ó una oficina de *sport*, entonces pagarán su patente municipal, y á la nación le pagarán su patente nacional en virtud del negocio de *sport* que tienen allí; pero en ningún caso vendrán á pagar tres patentes: una nacional, por el frontón, una segunda municipal por el frontón, y una tercera por el *sport*, es decir, por la venta de boletos.

Yo estoy conforme; la comisión quiere que los frontones paguen, porque es la manera de impedir que se juegue; pero no podemos hacerlo cometiendo una injusticia, una verdadera exacción.

Es por eso que la comisión había despatchado en el sentido en que se pronunció la cámara; y por esta razón también es que me atrevo á pedir á la honorable cámara que insista en su sanción anterior.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

El pleito que se ha iniciado últimamente respecto al pago de este impuesto, ha sido justamente por haber el congreso fijado un impuesto sobre estos establecimientos, cuyo impuesto debía haber sido fijado por la municipalidad.

Desde tiempo atrás la ley orgánica muni-

icipal de la capital, de la antigua municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, cuando era gobernada por la provincia del mismo nombre, fijaba siempre impuestos sobre las canchas de pelota.

Pero, al dictarse la ley orgánica de la nueva municipalidad de la capital federal, se incorporó entre los recursos de esa repartición el impuesto sobre canchas de pelota.

Quedó la municipalidad con este recurso.

Después, por el cambio de nombre de estos establecimientos, porque hoy se llaman *frontones* á lo que antes se llamaba *canchas de pelota*, el congreso dictó un nuevo impuesto sobre los mismos establecimientos que ya tenían impuestos municipales; y naturalmente, se produjo el pleito que se ventila actualmente ante la justicia para saber si corresponde á la municipalidad ó al congreso dictar este impuesto.

La ley orgánica autoriza á la municipalidad, por el inciso 7º del artículo 65, á poner impuestos sobre las canchas de pelota; y, al dictarla, el congreso se ha desprendido del derecho de gravar estos establecimientos, porque los ha considerado como de diversión y no como industriales. Nosotros nos hemos reservado el derecho de poner impuestos sobre los establecimientos industriales.

Así es que si volvemos á poner un impuesto sobre el establecimiento de los frontones, la municipalidad, apoyada en la ley orgánica, establecerá también su impuesto, y volveremos á tener el mismo pleito en el año próximo.

Es para evitar ese conflicto que se ha suprimido el impuesto nacional y se ha dejado en libertad á la municipalidad para fijarlo.

En cuanto á las casas de *sport*, cuando se dictó la ley orgánica no existían. Así es que no se pudo poner este impuesto entre los recursos municipales.

Pero, para que no quedaran sin un impuesto, el congreso les impuso uno anual.

En el proyecto de reforma de la ley orgánica, que se halla á estudio de la comisión de legislación, está agregado éste entre los recursos municipales.

Pero el congreso debe desprenderse de este impuesto y entregárselo á la municipalidad, porque se trata de casas de juego, de diversión, sobre las que la municipalidad ejerce vigilancia y cobra impuestos.

Así es que si votamos un impuesto sobre los frontones, invadimos la facultad de la municipalidad.—He dicho.

—Se vota si se acepta la modificación introducida por el serrado y resulta negativa.

Sr. Secretario—En el mismo artículo, la honorable cámara decía: «Esta patente será satisfecha por las casas y establecimientos existentes, dentro de los primeros 15 días del mes de enero.»

El honorable senado dice: «Esta patente será satisfecha por las casas ó establecimientos existentes, *en el mes de febrero.*»

Modifica: «15 días del mes de enero», poniendo: *mes de febrero.*»

—Se vota si se acepta esta modificación y resulta afirmativa.

Sr. Secretario Ovando—En el art. 2º, la honorable cámara decía: «Los buques de bandera extranjera que hagan el comercio de cabotaje, pagarán una patente anual, como sigue.»

El honorable senado suprime la frase: *bandera extranjera.*

—Se aprueba la modificación leída.

Sr. Secretario Ovando—El art. 3º, la honorable cámara lo redactaba así: «Que dan derogadas las prescripciones legales que se opongan á las disposiciones de la presente ley.»

El senado lo redacta en estos términos: «Quedan exceptuados de la patente establecida en el artículo anterior, los buques de cabotaje que cumplan lo prescripto por el decreto de 6 de abril de 1875.»

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Acabamos de votar algo muy trascendental; y lo hemos votado, por decir así (y pido permiso á la honorable cámara para usar de esta figura retórica), entre gallos y media noche, conversando y sin saber lo que se votaba.

Esta modificación introducida por el honorable senado es gravísima: vamos á armar al cabotaje con bandera extranjera!

Sr. Malbrán—Llamo la atención del señor diputado sobre la última modificación, que precisamente establece la excepción para los buques que usan bandera nacional.

Así es que se salva el inconveniente que hace notar el señor diputado.

Sr. Mansilla—¿Qué dice el decreto?

Sr. Beracochea—Voy á dar el dato que desea el señor diputado.

Cuando la comisión de la cámara despa-
chó este asunto, incluyendo las palabras: «los buques con bandera extranjera», tuvo en vista la siguiente razón:

El decreto de 1874, renovado en 1875, que es el que indica el proyecto enviado por el senado, estatúa que todos los buques de cabotaje debían tener á bordo por lo menos un argentino, de más de diez y

siete años, con el nombre de capitán de bandera.

Tenia por objeto este decreto ir formando paulatinamente la marinería nacional, para los casos necesarios.

Pero ha sucedido que, con el objeto de eludir esto que se reputa una carga, y que sin duda debe serlo, casi todos los buques de cabotaje tomaban bandera extranjera, porque no teniendo la bandera nacional, no se necesita llevar, según, ese decreto, capitán de bandera á su bordo. Y así venía á quedar no solamente frustrado el propósito del decreto, sino que se perjudicaba la renta.

Entonces el poder ejecutivo, autor de este proyecto, pensó que por este medio indirecto podría obligarse á cumplir aquel decreto, llenando así los objetos que se había propuesto.

El honorable Senado ha creído, según tuvo oportunidad de escucharlo en la discusión á que asistí, que estas palabras eran mal sonantes en una ley; y entonces ha establecido, como principio general, que están obligados á pagar tal patente todos los buques de cabotaje, consignando en seguida que quedan exceptuados de esa obligación aquellos que cumplan lo prescripto en el decreto de 1875.

Sr. Mansilla—El señor diputado (perdone la forma de la pregunta) ¿ha votado por la enmienda del senado?

Sr. Beracochea—Sí, señor.

Sr. Mansilla—Entonces no hago moción de reconsideración.

Es necesario votar eso, para que quede completo el pensamiento del senado.

Sr. Olmedo—Se puede leer el decreto.

—Se lee:

Artículo 1º Desde el 1º de julio en adelante, todos los buques nacionales de cabotaje tendrán á su bordo, por lo menos, un ciudadano argentino mayor de diez y siete años, en calidad de tripulante como representante de la bandera.

Sr. Olmedo—Haré constar que la explicación del señor diputado no satisface, porque resulta de ese decreto que van á ser exceptuados del impuesto los buques que cumplan con lo prescripto en él, es decir, que tengan un grumete de bandera; de manera que en todos los buques no se realizará el propósito que tuvo el poder ejecutivo, no usarán la bandera nacional.

Sr. Beracochea—Por eso se les grava.

Sr. Olmedo—Permítame.

La excepción debe ser hecha en favor de los buques que, teniendo bandera nacional, lleven á su bordo un grumete encargado de la bandera.

Sr. Beracochea—Los buques que ten-

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

gan bandera nacional no pueden dejar de llevar un encargado de bandera. Los que no quieran tener esa carga, tomarán bandera extranjera, y entonces quedarán gravados.

Sr. Mansilla—Es muy sencillo: si quieren tener bandera extranjera, pagarán patente.

No es mucho tener un solo muchacho.... que pasará las penas del purgatorio. (*Risas.*)

—Se aprueba la modificación en debate.

Sr. Presidente—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vueltos á sus asientos los señores diputados, continúa la sesión.

ASUNTOS ENTRADOS

La comisión de hacienda se ha expedido en el proyecto del poder ejecutivo referente á la rescisión del contrato de las obras de salubridad.

Sr. Presidente—Sírvasse leerlo el señor secretario y mandar invitar al señor ministro á pasar al recinto.

Sr. Mansilla—Después de este asunto, ¿qué otra cosa queda por despachar?

Sr. Secretario Ovando—Las modificaciones del honorable senado en el proyecto de impuestos internos, el proyecto del honorable senado sobre expropiación de un terreno para la construcción de un faro, y el dictamen de la comisión de presupuesto sobre el proyecto de reducción de sueldos.

Sr. Mansilla—Son cosas que podemos despachar.

Sr. Presidente—Perfectamente.

OBRAS DE SALUBRIDAD

A la honorable cámara de diputados:

La comisión de hacienda tiene el honor de aconsejar la sanción del proyecto de ley del poder ejecutivo de que se ha dado cuenta en la sesión de hoy, sobre rescisión del contrato de las obras de salubridad de la capital.

La comisión propone como art. 4º el siguiente, cuya sanción aconseja igualmente á la honorable cámara.

«Art. 4º El poder ejecutivo podrá hacer los gastos que demande la presente ley imputándolos á la misma, quedando autorizado para disminuir en un 50 %, el impuesto que cobra la empresa arrendataria de las cloacas y desagües.»

*Beracochea.—Centeno.—García.—
Lársen del Castaño.—Gilbert.*

—Ocupa su asiento el señor minis-

tro del interior, general don Julio A Roca.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Mansilla—Por qué?

Sr. Presidente—Porque la cámara ha decidido constituirse en sesión permanente para considerar todo lo que se haya despachado.

Sr. Mansilla—La cámara no ha resuelto eso.

Varios señores diputados—Sí, señor.

Sr. Presidente—Por lo menos, yo lo he entendido así.

El señor diputado puede proponer cualquier otra cosa.

Sr. Mansilla—Yo me felicito de que el señor presidente lo haya entendido así. Yo lo tenía en mi pensamiento; pero yo no he pronunciado palabras que lo manifestaran.

Hago moción en ese sentido.

Varios señores diputados—Ya la hemos votado.

Sr. Centeno—¿Está en discusión el despacho de la comisión de hacienda?

Sr. Presidente—Sí, señor.

Sr. Centeno—Pido la palabra.

Dada la premura con que la comisión se ha expedido, parecería, á primera vista, que tal vez el estudio no fuera completo; sin embargo, debo anunciar á la cámara que la comisión ha tenido oportunidad de hacerse cargo del mensaje del poder ejecutivo con anterioridad á la sesión de hoy.

Se sabe que hace tres ó cuatro días que ese mensaje ha venido á la cámara, y que no se ha podido dar cuenta de él á causa de no haber habido sesión; por consiguiente, la comisión y el diputado que habla, á quien aquélla tuvo la deferencia de encargar el estudio de los antecedentes de este asunto, se hallan habilitados para poderlos dar con la simplicidad con que estas cosas se pueden tratar cuando un asunto es verdaderamente claro, y máxime cuando se tiene en cuenta que la comisión puede ser ayudada, cooperada poderosamente con la presencia del señor ministro del ramo y con antecedentes que él dará á la cámara en momento oportuno.

Por lo que respecta á la comisión, debo solo decir que considera el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo como un verdadero beneficio, como un beneficio trascendental para las finanzas del país.

Bastará recordar los antecedentes contenidos en los artículos mismos del proyecto de ley que se ha leído, para dejar demostrada palmariamente la verdad de este aserto,

En efecto, señor presidente, la empresa arrendataria de las obras de salubridad de la capital tiene, por la ley, facultad para retirar un diez por ciento de utilidad sobre un capital reconocido de cuarenta millones de pesos oro.

Este diez por ciento, debe percibirlo durante 39 años; y, en consecuencia, la cámara podrá apercibirse, por una simple operación aritmética, de que la suma á retirar por la empresa, como contribución ó impuesto público, representa cuatro millones de pesos oro anualmente.

Por el proyecto de ley que está en este momento al debate de la cámara, la situación varía enormemente.

El impuesto que se asignaba se disminuye en un cincuenta por ciento; de tal suerte que, estableciéndose por el contrato de arrendamiento que el término medio máximo sería de seis pesos oro, los propietarios del municipio de la capital sólo tendrán que pagar la mitad.

Esto por una parte.

Por la otra, el impuesto que va á cobrarse, con la intervención del gobierno, representa un servicio de 37 años, dentro de los cuales el municipio se libtará de esta deuda; y se libtará de esta deuda pagando en vez de cuatro millones de pesos oro, anuales, solamente dos millones.

Se disminuye, entonces, en un cincuenta por ciento el servicio anual que representa esta carga para el municipio, y se disminuye en dos años este mismo servicio, puesto que, como he dicho, la empresa arrendataria se pagaba de sus cuarenta millones en el término de 39 años, y los gastos que van á ocasionar al gobierno estas mismas obras se pagarán en el término de 37 años.

Véase entonces, señor presidente, cómo, apreciando la cuestión en términos generales, resulta lo siguiente: primero, que para el municipio esto representa el alivio de una carga en un cincuenta por ciento, puesto que, como he dicho, la empresa arrendataria iba á cobrar cuatro millones de pesos oro, anuales, y el gobierno sólo cobrará al municipio dos millones de pesos anuales; segundo, que, respecto al tiempo, se disminuye en dos años; y, por último, que, respecto al gravamen que va á pesar sobre los habitantes del municipio, se disminuye también en un cincuenta por ciento, según un artículo que la comisión, con anuencia del señor ministro del interior, ha introducido en el proyecto de ley en debate.

Estos son, señor presidente, los rasgos salientes de la operación que el poder ejecutivo nos presenta en el proyecto.

Se ha debatido extensamente esta cues-

tion. No entraré en sus detalles, que han originado discusiones tan luminosas en esta cámara y en el senado, cuando se inició esta gran cuestión del arrendamiento de las obras de salubridad; pero en realidad, señor, es indiscutible este punto de derecho natural: el dominio de las aguas no puede ser de carácter particular; las aguas deben ser distribuidas y administradas por los poderes públicos, llámense gobierno, llámense municipio. Y de esta manera quedará establecido que las expoliaciones sordidas del interés público no pueden primar sobre los intereses de la nación.

Entonces, señor presidente, el poder ejecutivo viene á proponernos este proyecto, por el cual se hace cargo de ese servicio, cumpliendo con una prescripción de estricto derecho, volviendo sobre las cláusulas de un contrato que, francamente, no quiero en manera alguna calificar, pero que sería verdaderamente gravoso para el municipio de la capital, cosa que no es necesario demostrar desde el instante que ha despertado tantas resistencias hasta este momento.

El año 81, se dictó una ley por la cual se mandaba emitir títulos de renta de 5 por ciento de interés y 1 por ciento de amortización, respecto á las obras de salubridad de la capital. Era un empréstito de 8 millones, que podía ser interno ó externo —que daba eso á facultad del poder ejecutivo establecerlo—y á ese mismo empréstito quedaban afectadas directamente las obras.

Más tarde, el año 83, se autorizó á contratar un empréstito de 30 millones de pesos, que concentraba dentro de él, no sólo los 8 millones de pesos del empréstito para la prosecución de esas obras, sino también los 4 millones para la expropiación de las obras del Riachuelo.

Ambos empréstitos fueron refundidos en el del año 85, de 42 millones, y entonces la afectación que las obras de salubridad tenían, por aquellos antiguos empréstitos, quedó reducida á la responsabilidad que en el empréstito del año 85 se estableció por la nación, debiendo ese empréstito de 42 millones ser pagado con la renta de aduana, y subsidiariamente con las rentas generales de la nación.

En consecuencia, la observación que podría hacerse, de que el empréstito que se ordena por este proyecto de ley es contrario á aquél por el cual se afectaban las mismas obras de salubridad, en este momento no puede manifestarse, por lo que he dicho anteriormente, es decir, que ha quedado derogada la ley del empréstito del 81 por las disposiciones de la ley del 85.

Esta observación, que he visto reproducir-

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

da en algunos diarios de la capital, es insostenible, puesto que, como digo, todas las disposiciones de la ley del empréstito del 81 quedaren anuladas por las del 85.

Señor presidente: en la discusión en particular, tendré oportunidad de hacer algunas otras indicaciones y de hacer algunas preguntas al señor ministro, para que la cámara quede completamente ilustrada al respecto; pero, repito, la operación, á juicio de la comisión, es perfectamente clara y perfectamente benéfica para los intereses del municipio; y, en realidad, es una reparación, desde que estas obras, que deberían ser del dominio del gobierno, se sacan del dominio particular en que están, evitando las expoliaciones á que pueda dar lugar el interés particular.

En general, es todo lo que tengo que decir; en particular, daré todas las explicaciones necesarias.

He dicho.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Mirabeau tenía la costumbre de hacer sus discursos; pero tenía otra costumbre, la de pedir á algún amigo que le hiciera un discurso; y, curiosísimo fenómeno de la elocuencia, á veces decía mejor los discursos hechos por sus amigos que los discursos que él elaboraba tranquilamente en su gabinete.

Esta costumbre llegó á ser en él tan invencible, que yendo un día á la asamblea se encontró con un amigo que venía de ella.

—¿Adónde vas?—A la asamblea.—No hay sesión.—Lo siento.—Yo no!—¿Por qué?—Porque quiero leerte un discurso que voy á pronunciar mañana, después que tú, que has quedado con la palabra, hayas hablado.—Perfectamente, contestó Mirabeau, entremos á este café.

Entraron, y el diputado, que se llamaba Dupont, le leyó su discurso; y Mirabeau le dijo:—Lo encuentro bueno; sobre todo, la peroración es admirable. La introduciré mañana en mi discurso.

Como la honorable cámara sabe, Mirabeau tenía una memoria prodigiosa; le bastaba leer una sola vez una cosa, para recordarla, sin que quedara en el tintero un punto siquiera.

—No puedes, le dijo su amigo, porque yo ya he leído este discurso á una docena de colegas.—Esto no importa! Cuando yo haya introducido esa peroración en mi discurso, será inútil que salgas á reclamar: la peroración será mía.

Así lo hizo.

Naturalmente, yo no me puedo nunca encontrar en la situación de Mirabeau, y menos en esta cámara donde hay otros que

no son Danton ni Saint Just.... afortunadamente para el país. Pero necesito hacer un acto de conciencia. Necesito dar la razón en virtud de la cual voy á votar por este proyecto, cuando la opinión pública, cuando el país entero sabe que yo voté por el proyecto enajenando las obras de salubridad.

La razón, me la ha dado un hombre muy espiritual y de mucho talento que hay en esta cámara.... Aquí abunda eso. Pero en este caso me particularizaré, y diré que me refiero á mi distinguido colega y amigo el doctor Molina.

Señor, esa ley nos ensucia. Pero fué buena nuestra intención; creíamos que el gobierno de entonces acertaba.

Repito que la razón no la he encontrado yo; me la ha dado el señor diputado Molina.

Este es el fundamento de mi voto, en favor del proyecto en general.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Señor presidente: voy á dar las razones por las cuales votaré en contra de esta negociación.

Y empezaré por el final, es decir, por las palabras que ha pronunciado el señor diputado que acaba de hablar, para justificar su actitud de ahora en frente de su actitud de antes.

Yo, pienso, señor, que cuando un diputado vota en conciencia una ley, y además con estudio.... lo que es indispensable para votar con conciencia, no se ensucia cualesquiera que sean las opiniones que esa ley llegue á suscitar en el público, cualesquiera que sean las objeciones de que sea susceptible, cualesquiera que sean los desastres que pueda producir.

Lo que ensucia, es no estudiar lo que se debe estudiar, es no proceder con la corrección con que se debe proceder. Y cuando estos deberes han sido observados (y yo lo creo siempre tratándose del señor diputado como de los demás miembros de la honorable cámara) no hay poder humano sobre la tierra que pueda ensuciar á aquél que no merece un reproche.

Yo voy á votar en contra del proyecto, señor presidente, porque creo, como lo creía cuando se trató la ley por la que se enajenó las obras de salubridad, que el gobierno es mal administrador de esta clase de empresas, y porque creo que es poner en sus manos medios de coacción sobre la opinión..

(Respondiendo á una observación hecha en voz baja por uno de sus vecinos:) No, las obras de salubridad disponen de un personal muy numeroso.

El señor diputado me obliga á detenerme

sobre esta digresión, y yo tengo el mayor placer en hacerlo.

Creía que era bastante enunciar que la administración de las obras de salubridad pondría en manos del poder ejecutivo el número de mil empleados, próximamente,—que será lo menos que necesitará esta gran ciudad para ese servicio,—para demostrar que es una ley que le daría un poder electoral mayor aún que el que hoy puede tener.

Esto es siempre un peligro... Sí, que me refiera á este poder ejecutivo, sino á todos los gobiernos en general.

Fué una de las razones que tuve el honor de aducir cuando, discutiendo la ley del punto de vista de los principios, sostenía,—á mi juicio, con buenas razones y en buena compañía, porque la mayoría de la cámara votó en ese mismo sentido—que la enajenación por parte del gobierno no solo era conveniente del punto de vista financiero, sino que era también conveniente del punto de vista político.

Y recuerdo que levantándose objeciones, muy vigorosas por cierto, en contra de lo que se calificaba entonces, como se calificó después, de imprevisión por parte del gobierno, de abandono de algo que se ligaba tan estrechamente con la salud y el bienestar del vecindario, se decía que era una manera rara de proceder la del ejecutivo, que declaraba abandonar con entera espontaneidad y buena voluntad los elementos electorales de que se desprendía al entregar estas obras; que sería, sin duda, porque pensaba que esos elementos no eran eficaces en un momento dado.

Yo insistí en demostrar que siempre podrían ser eficaces, y que por eso la administración de estas obras constituía un peligro agregado á otros que ella tenía.

Pero, señor presidente, abandono este incidente á que me ha inducido la observación de mi estimado amigo el señor diputado por Entre Ríos, y continúo.

Yo creo que la enajenación de estas obras fué conveniente.

El gobierno se hizo de recursos efectivos que importaban una suma apreciable, la cual ingresaba en el tesoro público y era destinada á objetos indicados por la ley, útiles y convenientes; entraba á engrosar las existencias, los encajes metálicos del Banco Nacional, lo que permitía al gobierno, que iba á depositar esos fondos en aquel Banco, desenvolver la política de protección á las industrias, de estímulo al comercio, en fin, de desenvolvimiento de todos los medios de riqueza y de producción del país.

Si la aplicación no correspondió á las esperanzas, si se cometieron errores en la

práctica de las leyes que complementaban ésta, no es mía la culpa.

Yo debía creer, y sigo creyéndolo, que esa era la conclusión definitiva de lo que la cámara de que yo formaba parte sancionaba.

De manera que, cuando voté por esa ley, voté por una ley que creía benéfica, y sigo creyendo que la operación en sí misma no es mala.

Posteriormente, se hicieron multitud de trabajos por particulares, para demostrar los inconvenientes que resultaban para las finanzas nacionales de la sanción de la ley de arrendamiento; pero nunca, que yo sepa, se llegó á demostrar que, realmente, ésta era una mala operación para el gobierno; porque, á pesar de todos los cálculos alegres, no obstante todas las demostraciones en contrario, *á posteriori* nosotros podemos afirmar, con la experiencia de los hechos que han producido una catástrofe conocida en el mundo financiero, que ese *negocio* de las obras de salubridad, como intencionadamente se le calificó alguna vez, ha sido un negocio ruinoso para la empresa que lo realizó.

Ha sido lo que ha producido la caída de Baring, la segunda firma bancaria en el mundo. Y ha sido esa caída y la necesidad de guardar lealtad y consecuencia,—porque los gobiernos y las naciones también tienen deberes de lealtad y de consecuencia con los banqueros, pues siempre es deber de honradez ocurrir en favor del benefactor que se derrumba,—ha sido, digo, una necesidad de consecuencia y de lealtad de parte de la nación y del gobierno argentino, lo que ha motivado, expresamente lo afirmo, esta rescisión del contrato de arrendamiento, para salvar á la casa Baring.

Expresamente lo afirmo, repito, y tengo la seguridad de no ser desmentido.

Los banqueros que han negociado el empréstito con la nación han sido los primeros en insinuar la necesidad de esta rescisión, como único medio de levantar de encima de Baring, caído, el enorme peso de esa negociación fracasada desde sus comienzos, que se ha caracterizado con todos los síntomas, con todos los atributos de un negocio ruinoso.

¿Y porqué, señor presidente?

Aquí viene la demostración de por qué ese contrato fué bueno, porqué esa ley fué justa, y porqué este proyecto es inconveniente.

Señor presidente: lo que hay en plata, en la cuestión de las obras de salubridad, es que el vecindario no ha pagado nunca las obras de salubridad, porque no ha sido

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

nunca educado para pagarlas, como debe pagarlas.

Las obras de salubridad son muy caras en todas partes. Estos servicios son, lo repito, sumamente caros en todo el mundo. Y en Buenos Aires, como en todas las ciudades de origen español, hemos vivido hasta el presente ya se sabe con que incuria. Y aparejada á la incuria está la economía: no hay nada más económico que vivir sucio, y es lo que se consigue con no tener obras de salubricación.

Mientras tanto, ¿qué habría resultado si el arrendamiento no se hubiera hecho? Que estaríamos sin obras de salubridad. Porque estas obras, en el tiempo transcurrido desde que las entregó el gobierno, han avanzado como no habrían avanzado si el gobierno las hubiera se uido administrando. Y esto es muy explicable: porque el gobierno no habría tenido fondos suficientes, porque el trabajo que hacen los gobiernos es hecho siempre con lentitud y con mayor gasto que cuando es hecho por los particulares; y finalmente, señor, porque el gobierno había fracasado en todas las tentativas de adelantamiento rápido de las obras, á consecuencia de la dificultad para obtener el personal técnico, de la dificultad para apresurar á los contratistas que las atendían desde antes; pues el señor Bateman, ó su representante aquí, hacía objeciones á cada paso, para hacer un sifón, para construir una cloaca.... No sé la terminología precisa de estas cosas, pero basta enunciar la idea para que la cámara se aperciba del fundamento de mi observación.

Afirmo, pues, que las obras de salubricación no habrían avanzado—y no se necesita, para demostrarlo, sino recordar los inconvenientes que median,—no habrían avanzado si el gobierno las hubiera administrado durante ese tiempo. Y esas obras habrían producido al gobierno tan poco como han producido á la empresa,—no pudiendo hablar de cifras porque ellas no constan en ningún documento público que haya tenido á la vista, ni las he buscado siquiera,—para lo cual tampoco habría tenido tiempo, no creyendo que se iba á tratar esta cuestión de improviso.

Es de notoriedad pública que la empresa arrendataria de estas obras no cobra la centésima parte del impuesto que debía cobrar, que nadie le paga, que cada propietario le hace un pleito. Y ¿porqué le hace un pleito? ¿Porque sean mostruosas las cuotas que cobra?

He oído á la mitad de las personas que que se quejan de lo que les pasa con estas obras, decir que son sumamente caras y enunciar una cifra que me ha parecido ridí-

cula, teniendo en cuenta lo que gasta de agua una familia, las necesidades de limpieza de una casa de ciertas dimensiones y habitada por tantos y cuantos individuos!

De manera que estoy en lo cierto afirmando que la verdadera razón porque no se ha pagado á la empresa, no es porque ella sea antipática al público, no es porque se crea que el gobierno debe administrar esas obras: nada de eso; es porque no se ha querido pagar, es porque no se tiene la idea de pagar esos servicios, que son, como decía antes, muy caros en todas partes, y que aquí han levantado resistencias vigorizadas con la esperanza de que al fin se había de venir á proponer lo que ahora nos propone el poder ejecutivo: la rescisión del contrato, para que el gobierno vuelva á administrar las obras.

Esto, por el pasado.

Por el porvenir, mis impresiones son las siguientes:

Desde luego tendremos que hacer un considerable desembolso en fondos públicos, es decir, comprometer el crédito nacional con una suma alrededor de 16.000.000, si no estoy equivocado....

Sr. Centeno—De 33.000.000.

Sr. Olmedo—De 33.000.000, para devolver á la empresa las sumas entregadas por ella á la nación y para la conclusión de las obras proyectadas.

Como indemnización de estas obras, damos una suma equivalente á 2.500.000 pesos ó á 3.000.000.

Sr. Ministro del interior—No hay indemnización.

Sr. Olmedo—El mensaje lo dice.

Sr. Ministro del interior—No, señor.

Esos 2 millones corresponden al interés del dinero adelantado al gobierno.

Sr. Centeno—La empresa ha adelantado 14 millones.

Sr. Ministro del interior—Es una simple devolución del capital y de los intereses respectivos.

Sr. Olmedo—Perfectamente.

Esto por lo que hace á la erogación que al presente tiene que imponerse á la nación, para hacer esta rescisión.

En seguida vendrá el pago de las obras que sea necesario construir para completar la red de cloacas, de manera que comprenda todo el radio de la ciudad.

Después, será necesario culcular el capital y el interés anual de ese empréstito y su servicio.

Y no me parece aventurado afirmar que el gobierno no percibirá por las obras, como no lo ha percibido la empresa, lo que calcula; pero ni mucho menos.

A mi juicio, el poder ejecutivo hace un cálculo completamente erróneo.

Si el cálculo que rebaja la cuota,—que no es de 10 por ciento, como dice el señor miembro informante de la comisión, sino de 6 $\frac{1}{2}$ por ciento....

Sr. Centeno—Me he referido al interés del capital reconocido, de 40 millones.

Sr. Olmedo—Lo que establece la ley, es que, cuando la empresa llegue ha obtener un interés mayor de 10 por ciento, rebajará la cuota del servicio. ¿No es así?

Eso es muy distinto de lo que afirma el señor diputado, es decir: que la empresa estaba autorizada á tener una utilidad de 10 por ciento.

Sr. Ministro del interior—Sí, señor: estaba autorizada.

Sr. Olmedo—No, señor. Estaba autorizada á tener el interés que le diese la obra.

Sr. Centeno—Está equivocado.

Sr. Olmedo—La empresa no tenía limitación, porque sería contrario á la constitución fijar un tipo de interés.

La ley autoriza á la empresa á cobrar 6 $\frac{1}{2}$ pesos por cada servicio, y esos 6 $\frac{1}{2}$ pesos puede reducirlos á la mitad, ¿no es cierto, señor diputado?

Sr. Centeno—Si el señor diputado me permite, le diré que el artículo 17 explica el punto.

Sr. Olmedo—El señor diputado dice que el gobierno va á rebajar un 50 por ciento de lo que se va á cobrar....

Sr. Beracochea—El artículo 17 establece lo siguiente: «Cuando el producto líquido de la explotación excediese del interés de 10 por ciento anual del capital de la empresa, el gobierno hará las rebajas correspondientes en las cuotas, á cuyo efecto revisará las cuentas de la empresa.»

Quiere decir, entonces, que hasta el 10 por ciento la empresa puede cobrar impunemente; pero que cuando excediese del 10 por ciento el gobierno puede intervenir.

Sr. Olmedo—Eso es precisamente lo que he dicho.

Sr. Beracochea—Es que el señor diputado no se ha explicado bien.

Sr. Olmedo—Siempre lo atribuyo á deficiencias de mi parte, cuando mis colegas no me entienden.

Sr. Beracochea—Entonces, es por culpa mía.

Sr. Olmedo—A lo único que se refiere el 10 por ciento, es á la facultad del gobierno para modificar esta tarifa cuando el interés que saque la empresa excediera de ese producido.

Pero yo digo que si el gobierno piensa

rebajar la cuota de 6 $\frac{1}{2}$ pesos, que es la fijada para cada casa, proporcionalmente....

Sr. Centeno—Permítame, está equivocado.

El señor diputado está confundiendo el 6 $\frac{1}{2}$ de interés sobre el capital, con 6 $\frac{1}{2}$ pesos, cuota que se va á cobrar, término medio, por los tres servicios.

Sr. Olmedo—La cuota de 6 $\frac{1}{2}$ pesos que la empresa está autorizada á cobrar por la ley, piensa el señor diputado que, una vez que estas obras pasen á poder del gobierno, se reducirá en un 50 por ciento.—¿Es ó no exacto?

Sr. Centeno—Eso está proyectado en la ley.

Sr. Olmedo—A mi juicio, es insubsistente el cálculo que ha hecho el poder ejecutivo; y creo que el resultado de la operación, para el gobierno, va á ser propiciarse la voluntad del vecindario y hacer viable la percepción de este impuesto, reduciéndolo á la mitad. Pero la consecuencia que fluye es que el gobierno no va á poder, con las cantidades que recaude, hacer el servicio de la deuda.

Sr. Centeno—Eso se lo vamos á demostrar oportunamente.

Corresponde eso á la discusión en particular, y ahora estamos considerando en general el proyecto.

Sr. Olmedo—Si le molesto....

Sr. Centeno—No, señor. Al contrario.

Sr. Olmedo—Estoy haciendo una serie de observaciones tendientes á demostrar la inconveniencia de este proyecto.

Sr. Centeno—Es una práctica abusiva.

Sr. Olmedo—Lo que yo sostengo, es que el cálculo es insubsistente, mucho más si se tiene en cuenta que este vecindario se resista al pago de este impuesto, como sucedía antes cuando las obras estaban en poder del gobierno, en que cada caso era causa de un pleito. Y eso que no había más que el servicio de las aguas, el más indispensable y el que más fácilmente se podía suprimir, con solo interrumpirlo.

Entonces, pues, si este servicio no ha de ser cubierto con las rentas que produzcan las obras mismas, y si á este hecho se agrega el de que desde el momento tenemos que comprometer el haber de la nación con otra deuda cuyo servicio no va á salir del producto de esta empresa, se puede afirmar resueltamente que esta es una mala operación financiera para la nación.

Me parece que no hay ninguna razón, del punto de vista de las finanzas nacionales, que justifique la rescisión de este contrato.

Pero si todavía á esto se agrega que las obras de salubridad han de tener, en manos

del gobierno, los inconvenientes que antes mencioné, resultará que, en el porvenir, lo que fatalmente ha de suceder es que el gobierno entregue estas obras á la municipalidad ó las saque nuevamente á licitación para su arrendamiento á una empresa particular, como la única manera eficaz de hacer fácil la percepción de la renta que ellas producen y los beneficios que de dichas obras espera recibir el municipio.

Son estas las razones que tengo para votar en contra de este proyecto, que son las mismas, desenvueltas de una manera más amplia, en aquella ocasión, que me hicieron votar en favor de la ley de arrendamiento, que no ha dejado de ser buena.

Me resta solo agregar algo que es aplicable á todas las situaciones.

Es necesario que los hombres públicos de nuestro país se acostumbren á respetar mucho la opinión; pero sobre todo es necesario que se acostumbren á no respetarla cuando no tenga razón, como en este caso.

Esa ley de arrendamiento de las obras de salubridad ha levantado una resistencia universal en la ciudad de Buenos Aires, y no encuentro ningún motivo que justifique el cambio de opinión del gobierno respecto de esta cuestión, sino que hay una cierta timidez para desafiar la opinión dominante, en un asunto en que se cree, sin embargo, con muy buenas razones, que la opinión está extraviada!

Yo desearía más coraje de parte del poder ejecutivo para afrontar esta cuestión, más coraje para resistir la opinión cuando ella está extraviada, cuando son insubsistentes todas y cada una de las razones que pretende tener como fundamento.

Es mi voto, señor presidente; yo lo puedo hacer porque no sospechará nadie que me lleva ningún interés que no sea el de una buena administración en el país, y la gloria que de ello resulta para los hombres que desempeñan puestos públicos.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Debo observar al señor diputado que el asunto está en discusión en general, y que el señor diputado ha usado ya de la palabra.

Puede hacerlo para rectificar.

Sr. Mansilla—Trataré de ser brevisimo. El tiempo es precioso y mis palabras no son perlas finas.

Puedo estudiar las cuestiones con toda la precisión y la minuciosidad con que las estudia mi honorable colega el señor diputado por Córdoba...

Sr. Olmedo—No lo pienso, señor diputado.

Sr. Mansilla—Pero tengo una predis-

posición, de la que él no participa, á inspirarme en todo lo que es una lección, una enseñanza; y, sobre todo, cuando veo que la multitud grita, me inclino á dudar de mi infalibilidad.

El sabio puede decir: prefiero engañarme solo, á tener razón con todo el mundo. Pero el que está muy lejos de haber calzado el coturno de la sabiduría ¿cómo puede desconocer los hechos que vienen, por decir así, á golpear la puerta de su propia casa, diciéndole: Esa ley dictada con la mejor buena fe, esa ley dictada con sinceridad, esa ley que no ha deshonrado á nadie, pero que puede haber ensuciado, del punto de vista de la retórica, puesto que se trata de una cosa sucia, debe ser reformada? (*Risas*).

Sostengo que se necesita un coraje que no tuvo Cronwell, quien se arrepintió, cuando vió la guerra civil, después de haber hecho cortar la cabeza á Carlos I. Ese coraje no lo tuvo Lavalle, quien, en horas póstumas, se arrepintió de haber hecho fusilar á Dorrego!

Sr. Olmedo—Pero esos eran crímenes evidentes! ¿Cómo habían de sostener el error!

Sr. Mansilla—La Unión Cívica se ha formado sosteniendo que éste era un crimen de malversación: y la Unión Cívica nos ha derrocado del poder al señor diputado y á mí, que sosteníamos la administración del doctor Juárez. (*Aplausos*.)

Sr. Olmedo—A mí no me ha derrocado de ninguna parte, puesto que estoy aquí donde estaba.

Sr. Mansilla—Ya que el señor diputado quiere que haya asimilación completa, le diré lo que la conciencia de los hombres que legislamos impone.

Es asumir la responsabilidad de nuestros actos ante el mundo, no ante un pedazo pequeño de tierra sobre este planeta que habitamos, que se llama la República Argentina, y que el señor diputado, con un candor que envidio, pretende que es lo que ha hecho quebrar á la casa de Baring; y decir lo que uno de los grandes potentados de la tierra, porque era el primer ministro de uno de los más grandes países, lo que Roberto Peel dijo en el parlamento: He sostenido durante años y años que era preciso proteger los cereales; pero, en presencia del hambre que aflige la Inglaterra, vengo á hacer aquí acto de conciencia honrada y á pedirlos que levanteis los derechos á los trigos! (*Muy bien!*)

No quiero saber si ese proyecto fué bueno ó malo; no quiero saber si se consultaron los intereses económicos de la nación; pero sí quiero y tengo el deber de saber que

una población de seiscientos mil habitantes, sin que se pueda hacer más excepción que la del señor diputado, grita.

Y yo mismo puedo gritar por lo que me cobran en una pequeña finca que estoy edificando en la calle de Charcas, que es una exageración.

El señor diputado sabe que tengo un respeto tan grande por la mayoría, que puedo afirmar sin ser desmentido que, si no soy amigo personal de todos los que están aquí, lo soy político; que mis relaciones son las más cordiales y que no he podido, ni siquiera como una cobardía, para solicitar los aplausos de la opinión pública, haber empleado la figura de retórica que empleé, diciéndole de dónde venía, sino con el objeto de amenizar á la cámara.

El señor diputado, que es un hombre de talento, sabe que la ocasión la pintan calva, y la ha tomado por los cabellos. Siento que en este caso sea tan refractario que no vea que el país entero nos dice que estamos haciendo bien, si tenemos la intención de aceptar esta enmienda que ha hecho el poder ejecutivo, porque en este momento el país está protestando contra lo que hacemos.

Yo salí de aquí con mi conciencia tranquila, con mis manos limpias, como siempre he salido. Pasó el tiempo. Me he equivocado. ¿Y?... ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? ¿Exponernos á que mañana nos publiquen nuestros discursos, nos pongan en evidencia y digan que fulano, que votó en favor en silencio, dijo esto la vez pasada?

No! Mejor es tener el coraje de decir: Me he equivocado; los tiempos son otros; los hombres son falibles; y, sobre todo, prefiero que no se equivoque el pueblo y equivocarme yo. Si me equivoco ahora, me equivocaré por cuenta del pueblo. Y si el poder ejecutivo se equivoca, el pueblo aprenderá á tener juicio y á no hacer revoluciones y Unión Cívica nada más que porque se trata de facilitar los medios de que sus inmundicias vayan donde deben ir.

He dicho.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Para una breve rectificación.

El señor diputado no puede creer que yo dude de su capacidad para estudiar esta cuestión, como todas.

No puede atribuírme la intención de atrapar una ocasión por los cabellos para decir una cosa que, según el señor diputado, es desagradable ó inconveniente, y que, según mi pobre opinión, es muy acertada.

Pero lo que el señor diputado me ha de reconocer, seguramente, es que, á pesar de

toda su brava declamación, yo tenía muchísimo más coraje que él cuando, no sólo manifestaba que mis opiniones de ahora son concordantes con las de entonces, sino que hacía votos porque el poder ejecutivo, porque los hombres que gobiernan el país, tuvieran el coraje, el raro coraje de los hombres de estado, de desafiar la opinión cuando, seguramente, está equivocada.

Y el señor diputado no tiene necesidad de ningún coraje para equivocarse con el pueblo, como él mismo ha dicho, y para incurrir en todos los errores en que incurrían las muchedumbres que están guiadas por el interés.

De manera que el ejemplo de Roberto Peel, emendándose cuando se convenció de que su ley protectora de los cereales era un error, no tiene ningún mérito, no es aplicable al caso, porque si Peel estaba convencido de que había errado, yo lo estoy de que acerté.

Cuando el señor diputado se refirió á Lavalle y á Cromwell, se refirió á dos casos en que no había dos opiniones, en que la conciencia universal estaba hecha. Cromwell había cometido un crimen. Lavalle lo había cometido también. La historia juzgó esos crímenes, sobre los que no están habilitados para pronunciarse los contemporáneos, sin duda, pero de que todos los hombres se arrepienten en el fondo de su conciencia, porque llevan la reprobación interna de los mismos que los han cometido. Mientras que aquí no se trata ni de crímenes ni de errores, puesto que yo estoy sosteniendo que no he cometido error cuando sostuve aquella ley, porque esa ley era buena.

Yo quería salvar esta apariencia de cobardía en que el señor diputado...

Sr. Mansilla—No, señor; aquí no se trata de que el señor diputado tenga ni más valor ni menos que yo.

Sr. Olmedo—Yo no quiero que el señor diputado me pinte como un cobarde que no sabe arrepentirse, cuando, al contrario, estoy dando pruebas de coraje.

Sr. Mansilla—He dicho que siento no tener el valor del señor diputado.

Sr. Olmedo—Yo digo esto: que para lo que se necesita mucho coraje, es para no tener el coraje de desafiar la opinión pública á este respecto, cuando el señor diputado sabe que su casa de la calle de Charcas no le cuesta mucho por el servicio de cloacas, si compara con lo que cuesta eso en París y en Londres, en donde la construcción de cloacas es más barata porque los artefactos lo son.

Sr. Mansilla—Desgraciadamente, no soy propietario allí.

Yo quiero que mi honorable colega por Córdoba, y particular amigo, el doctor Olmedo, entienda las cosas....

Sr. Olmedo — Muchas gracias! Después de llamarme cobarde, dice que no entiendo las cosas!

Sr. Mansilla — A veces no entiende, como no quería entender al señor diputado Beracochea.

Sr. ministro del Interior — Pido la palabra.

Voy á ser muy breve, porque el señor miembro informante ha expresado con bastante claridad los fundamentos del proyecto que el poder ejecutivo ha sometido á la consideración del congreso.

Desde los primeros momentos de este gobierno, su preocupación principal ha sido las obras de salubridad, porque creía así responder, con justicia, á las exigencias de la opinión pública. Y, en este caso, el poder ejecutivo cree servirlos.

Si hubiera creído el poder ejecutivo que la opinión pública estaba equivocada, habría resistido á sus pretensiones. Está compuesto de hombres probados en las luchas políticas, que no se hubieran arredrado ante una situación de esa especie.

Ha creído, pues, que era necesario que estas obras volvieran al dominio del estado.

Además, había otras circunstancias especiales que hacían necesaria esta rescisión.

Los acontecimientos financieros que han tenido lugar en Londres y nuestra crisis, obligaron á los banqueros ingleses y á todos nuestros acreedores á entrar en ciertos arreglos con la República Argentina.

Y una de las condiciones impuestas para llevar á efecto este arreglo, fué la rescisión del contrato de las obras de salubridad; ocasión que el poder ejecutivo ha tomado de los cabellos, porque tenía su propósito á este respecto.

Ahora, las ventajas de que estas obras vuelvan á poder del estado son evidentes, como lo ha demostrado el señor diputado por Santa Fe.

El municipio, según el contrato vigente, debe pagar, al año, 4.000.000 de pesos oro. La empresa tiene el derecho de percibir esta suma como compensación del capital empleado en la compra y complementación de las obras.

Al principio, cuando se empezó á tratar esta cuestión, los arrendatarios fueron muy exigentes; pero el poder ejecutivo, poco á poco, discutiendo las cláusulas, ha llegado á los términos que contiene el proyecto presentado á la cámara; á tal punto que todas las ganancias que la compañía arrendataria pensaba percibir de este negocio, las ha da-

do por perdidas, como voy á demostrarlo en la discusión en particular, con cifras, con números, que son más elocuentes que todo lo que se pueda decir.

Bien, pues; en pago de estas obras, nosotros tenemos que devolver los 14.000.000 entregados por la empresa, más 2.000.000 por intereses y divididos que la empresa ha pagado en Londres, es decir: 16.000.000. La última cuota que debía entregar la compañía arrendataria, de 7.000.000 de pesos, no la ha entregado; y dadas las dificultades de la casa Baring, es posible que no la pueda entregar.

Como es sabido, la casa de Baring no pudo realizar en Londres la operación del empréstito destinado á estas obras, porque el público inglés no respondió al llamado que se le hizo para la suscripción, por razones que no es del caso averiguar.

Quedó, pues, la casa de Baring respondiendo sola, con el sindicato de banqueros, á todas las exigencias, al dinero á pagara al gobierno y al necesario para la terminación de las obras.

De manera que esta casa no podía atender ya las obras, cuya construcción tenía que quedar paralizada forzosamente, si el gobierno no aceptaba la rescisión del contrato.

Había sumado 16.000.000; más 10.000.000 y 1.000.000 más cuyo origen se demostrará en la discusión, son 27.000.000 que tiene que devolver el gobierno, para que estas obras vuelvan al dominio público.

Veinsiete millones, pagados con bonos de 5 por ciento de interés y 1 de amortización, al tipo fijado, hacen necesaria una emisión de 33.750.000 pesos.

El servicio de esta suma representa 2.000.000, exactamente la mitad de lo que la empresa tiene que percibir del municipio.

Quiere decir que el alivio que se obtiene para esta ciudad es de un 50 por ciento.

La ventaja me parece evidente.

Ahora, respecto de si estas obras deben venir á poder del estado, no me parece que se necesite entrar en una discusión que de suyo quedó agotada, cuando se trató de enajenar estas obras, por hombres de mucho talento; porque, á seguir la teoría que dominó, debería el gobierno desprenderse de la aduana, de la municipalidad, en fin, de todos los servicios públicos.

Ha habido exageración de parte del señor diputado, al decir que la administración de las obras de salubridad requiere un ejército de empleados. Se necesitará un número reducido de empleados, menos que la municipalidad; porque, una vez que ella nada tiene que ver con la construcción de las obras,

solo tendrá los empleados necesarios para percibir la renta y para la vigilancia y la conservación de las mismas.

No entraremos en cuestión, porque me parece que todos los señores diputados presentes son hombres públicos, hombres de gobierno, que tienen, á este respecto, ideas formadas.

No se concibe un gobierno que quiera faltar á sus deberes, que quiera violentar la opinión y traicionar la confianza en él depositada, por unos cuantos peones, por unos cuantos empleados más que tenga bajo sus órdenes.

Estasson señor, las razones poderosas que ha tenido el poder ejecutivo para apresurarse á aceptar las proposiciones de los banqueros ingleses, creyendo que no podía llegarse á hacerlo en condiciones más ventajosas para la nación.

En la discusión en particular, podré dar á los señores diputados todos los datos que soliciten y satisfacer las dudas que puedan ocurrir.

Me reservo, pues, para ese momento.

Sr. Olmedo—Si el señor presidente me permite, voy á hacer una pequeña rectificación.

Haré notar al señor ministro que ha insistido mucho, con la habilidad que le caracteriza, en este dato: que el 50 por ciento de lo que paga Buenos Aires, en el estado actual de las obras, es lo que va á pagar en adelante.

La empresa está autorizada á cobrar la cuota determinada como término medio respecto de todas las casas. Pero de ahí no se deduce que lo que éstas tengan que pagar sea precisamente 4.000.000, es decir, el 10 por ciento sobre el capital de 40.000.000.

Es este el cálculo del señor miembro informante que he combatido como erróneo.

Lo que establece la ley es que la empresa cobrará seis pesos y medio, oro, por casa...

Sr. Ministro del interior—Todo está correlacionado.

El capital empleado por la empresa es de 40.000.000. Sobre esta suma tiene el derecho de sacar 10 por ciento de beneficio, es decir, 4.000.000.

Sr. Olmedo—Autorizar á sacar 10 por ciento, no quiere decir que lo saque.

Sr. Ministro del interior—No creo que la empresa renuncie á esa ventaja.

Sr. Olmedo—Es que no resulta eso de los hechos. Sacará el 10, ó el 1 por ciento.

No comprendo como no se ha negociado el empréstito para estas obras, pudiendo obtenerse el 10 por ciento, cuando en Londres el interés corriente es de 3 1/2 á 4 por ciento.

Sr. Ministro del interior—Es por otras causas; porque empezaba á producirse la crisis en Londres, y porque los ingleses veían las dificultades en que se iba á encontrar nuestro país.

Sr. Olmedo—Termino mi rectificación, señor ministro, diciendo que es arbitrario el cálculo de 4.000.000.

Sr. Ministro del interior—No, señor.

Sr. Olmedo—Lo que las obras de salubridad producirán, no es lo que la empresa está autorizada á percibir; porque no quiere decir que por estar autorizada á cobrar hasta sacar de utilidad el 10 por ciento del capital, esa utilidad resulte efectivamente del cobro de seis y medio pesos por casa, que es la cantidad que está autorizada para cobrar como término medio, por todos los edificios.

Sr. Centeno—Pero ese no es el dato.

El seis y medio es el término medio máximo.

Está equivocado el señor diputado.

Lo que se está discutiendo aquí son bases generales.

El poder ejecutivo pide permiso para realizar esta operación sobre las bases generales que contiene el proyecto de ley que se ha leído, y nada más.

En ese proyecto y en el mensaje que se acompaña, se recuerda que se ha reconocido á la empresa arrendataria un capital de 40 millones de pesos, oro, que debería invertir ó que ha gastado en la conclusión de estas obras, y que sobre este capital de 40 millones estaba autorizada la compañía para sacar una utilidad de 10 por ciento.

Sr. Olmedo—Pero de ahí no resulta que la saque.

Sr. Centeno—El señor diputado se coloca en el caso de que la empresa no pueda sacar el 10 por ciento en el primer año, en el segundo año; pero eso no hace á la cuestión.

Sr. Olmedo—Sí, hace á la cuestión, por esta razón: porque el señor diputado calcula en 4 millones lo que va á pagar el vecindario, pero la verdad es...

Sr. Centeno—Es natural que en el primer año, en el segundo tal vez, no pueda sacar los cuatro millones, porque...

Sr. Ministro del interior—Yo le podría mostrar los cálculos que hace la casa de Baring, la que en sus telegramas calcula cuatro millones de pesos.

Pero, suponiendo que en el primer año ó en el segundo no pueda sacar esa utilidad, teniendo en cuenta que el contrato va á durar 39 años, puedo asegurar que á los pocos años va á sacar esa cantidad.

Sr. Olmedo —Se puede jurar que si los ingleses hubieran sabido que iban á sacar 4 millones de pesos oro, anualmente, se hubieran guardado muy bien de rescindir el contrato!

Sr. Centeno—Decía, señor presidente, que de lo que el señor diputado se preocupa es de lo mínimo.

Aquí no se trata sino de las cláusulas del contrato de arrendamiento, pura y exclusivamente.

El señor diputado, que habrá leído las discusiones que con este motivo tuvieron lugar, recordará en qué número de casas se estimaba la edificación de Buenos Aires, y que sobre ese cálculo se había considerado que, imponiéndose la cantidad de seis y medio pesos, oro, por casa, se sacaba el 10 por ciento de utilidad sobre la cantidad de 40 millones. Es á eso á lo que se refieren el contrato y las bases generales.

Lo que ha dicho el señor diputado respecto á las resistencias que la población de Buenos Aires va á hacer, porque se disminuye en un 50 por ciento este impuesto de las obras de salubridad, francamente, esto se contesta con las mismas palabras del señor diputado.

No se explicaría que la ciudad de Buenos Aires se resistiera porque el poder ejecutivo actual se preocupara de disminuir en un 50 por ciento el impuesto del servicio de cloacas, etc.

Sr. Olmedo—¿Yo he dicho eso?

Sr. Centeno—Lo recuerdo así.

Creo que esta ley es más bien una ley salvadora, y que, creyendo el señor diputado abogar por los intereses del pueblo, mañana va á ver que las manifestaciones de la opinión pública serán perfectamente propicias para el acto que el poder ejecutivo ha iniciado, y al que, creo, la cámara prestará su sanción.

Sr. Olmedo—Son profecías demasiado halagüeñas.

Sr. Beracochea—Pido la palabra.

No tenía el honor de formar parte de la cámara, cuando se sancionó la ley enajenando las obras de salubridad de la capital; de haber estado en ella, probablemente habría votado también por la enajenación, porque en aquellos momentos estaban en voga las teorías spencerianas, teorías que á mi me habían apasionado desde la escuela; y solo la experiencia ha podido sustraerme á su seducción, mostrándome como ellas pueden fallar, en determinados y especiales casos.

Tal sucede hoy que votaré en contra de ellas, convencido de que respondo á una exigencia legítima de la República.

Pueden haber sido muy patrióticos los móviles, y yo lo creo, de todos aquellos que votaron por la enajenación. Puede ese voto haber obedecido á sentimientos honrados y á una aspiración de grandeza y de bienestar para el país; pero lo que es indiscutible en este momento, como lo ha dicho el señor diputado por la capital, es que con aquella sanción, lejos de traer un beneficio para los gobernados, les hemos proporcionado considerables desventajas. Y afirmo esto porque, cuando los gobernados hacen oír sus quejas y resistencias con tanta perseverancia, siendo ellos los mejores jueces de sus intereses, es seguro, es indudable que no proceden sino en virtud de serios perjuicios ocasionados por la enajenación de las obras, no obstante que el señor diputado por Córdoba pregona las ventajas de aquel acto.

Así, pues, si yo hubiera votado la enajenación, en presencia de las resistencias palpables que vienen hasta este recinto, no tendría inconveniente en votar ahora por el proyecto que está en discusión, y que he despachado como miembro de la comisión.

El señor diputado por Córdoba decía: La enajenación de las obras de salubridad fué, no sólo un acto benéfico, sino un acto de buena política.

¿Por qué? Porque aparte de otras ventajas, iba á quitar al gobierno elementos de opresión, elementos con los cuales podría convertirse, en un momento dado, en conculcador de las libertades públicas.

Es esto también lo que se dice en los libros de los que sostienen las teorías spencerianas.

Pero es muy raro el fenómeno que se ha producido en la República Argentina. El pueblo, de cuya parte se pone el señor diputado cuando sostiene esas teorías, quiere que las obras de salubridad, con todos esos elementos que pueden ser de opresión, vuelvan al gobierno que puede ser el opresor, antes que desprenderse de ellas. Y entonces digo que no es nuestro pueblo el que reclama el imperio de esas teorías.

El señor diputado se encargaba de decir que el pueblo había resistido esa negociación, como lo demuestra el hecho de no haber pagado los impuestos á la empresa.

Y yo pregunto al señor diputado: ¿por qué no ha pagado? ¿Por qué la ley es buena? ¿Por qué el pueblo ha querido que continúen los contratistas con las obras?

No. No las ha pagado porque el contrato era oneroso para el pueblo. Por eso lo ha resistido.

Decía el señor diputado que nos habíamos prevalido de la quiebra de Baring para rescindir este contrato.

Sr. Olmedo—No, al contrario.

Le rectifico para que no incurra en un concepto erróneo.

Sr. Beracochea—Bien. Perdóneme; tiene razón.

Decía el señor diputado que se rescindía este contrato por salvar á la casa de Baring; que era un esfuerzo que se hacía para corresponder á los servicios que esa casa había hecho á la República.

Sr. Olmedo—Y aplaudo, de ese punto de vista.

Sr. Beracochea—Señor presidente: es muy posible que haya entrado esa consideración, no como causa eficiente y determinante de la rescisión, pero sí como causa ocasional.

Sr. Olmedo—El señor ministro me acaba de dar la razón.

Sr. Beracochea—No hago cargos á Baring, á quien tantos servicios debe la República Argentina, como en otra ocasión he tenido oportunidad de decirlo; pero hoy yo le pregunto al señor diputado: ¿Qué va á hacer la República Argentina, sosteniendo un contrato con una casa que ha quebrado? ¿Qué responsabilidad nos ofrecería una casa que ha cesado en sus pagos?

Eso es lo que yo quisiera que el señor diputado trajera á examen, para que, con su clara inteligencia, nos demostrase las ventajas que habría en dejar subsistente ese contrato.

Señor presidente, la perspectiva era esta: las obras no se habrían concluido, y no habríamos podido hacer efectiva la responsabilidad de los contratistas, porque ellos mismos se hallaban imposibilitados de cumplir, por el mal estado de sus negocios.

Así es que si el gobierno ha cumplido con su deber, llevándoles una palabra de aliento, llevándoles un socorro—no diré socorro—llevándoles una ayuda, también ha sido previsor, aprovechando de esa oportunidad para rescindir ese contrato que, en mi opinión, ha sido oneroso; y aunque no lo hubiera sido hasta ahora, lo habría sido en lo sucesivo, por la mala situación de los negocios de Baring.

Estas simples razones bastarían para que nosotros votáramos este proyecto de ley, que nos ha traído el poder ejecutivo. Pero, aparte de estas razones que solamente he esbozado, porque no me ha sido posible estudiar de una manera detenida este asunto, hay las razones financieras, sobre las cuales no se ha detenido bastante el señor diputado por Córdoba.

Dice el señor diputado: Pero ¿quién nos garante que la cuota de seis y medio pesos, oro, vaya á dar los cuatro millones que co-

rresponden al 10 por ciento sobre los cuarenta millones que se considera que se va á gastar?

Pero ¿quién garante al señor diputado que, usando de la facultad para sacar el 10 por ciento de utilidad sobre los 40 millones, iban á detenerse en esta cuota de seis pesos?

Hay que tener presente que los poderes públicos de la República Argentina, en un contrato solemne que deben respetar, han autorizado á aquella empresa para obtener cuatro millones de pesos anuales; y el día que ella viniera á pedir, en el caso de que la cuota fuera insuficiente, que ésta fuera elevada para obtener aquello á que tienen derecho, los poderes públicos de la República Argentina no podrían negarse á ello, ni podrían pedir que se rebajara la tarifa, aunque las obras les produjeran el 10 por ciento.

Es en esto en lo que debe reparar el señor diputado, porque es muy posible que si hoy no se abona por el contribuyente más que 6 pesos por cada casa, no sea esta suma la que se abone en lo sucesivo, sino otra mayor; pues el señor diputado no ha probado que la empresa, con arreglo á la ley, no tenga el derecho de percibir impuestos hasta completar el 10 por ciento del capital invertido, es decir, de 40 millones de pesos.

Si nos hallamos obligados por este derecho de la empresa, derecho innegable, incontrovertible, y según el cual puede llevarnos 4 millones de pesos por año, ¿no es ventajoso un contrato de rescisión mediante el cual, en el peor de los casos, no tendremos que pedir al contribuyente más de 2 millones de pesos?

Sería necesario, no digo hacer un esfuerzo de dialéctica, sería necesario torcer todas las leyes que gobiernan la inteligencia humana para convencernos que 2 millones son más que 4 millones.

Yo no me convengo de esto, y por estas razones he suscrito el despacho de la comisión.

Es cuanto tenía que decir.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Me parece que el señor diputado por la capital ha hecho la observación más intensa y más vigorosa de parte de la comisión, y me intereso en contestarle por ese mismo motivo.

El señor diputado sostiene, y yo no veo en la ley nada que lo establezca terminantemente....

Sr. Beracochea—He leído el artículo 17.

Sr. Olmedo—...que los poderes públicos hayan autorizado á la empresa á sacar cuatro millones de pesos.

Enero 23 de 1891.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

11ª Sesión extraordinaria.

Sr. Ministro del Interior—El contrato está hecho de tal manera que la empresa sacará libre los cuatro millones.

Señala largo enterar á la cámara de todos estos detalles; básteme decir que todas las cláusulas del primer contrato hecho y de los contratos posteriores.....

Sr. Olmedo—Pero un contrato se modifica con otro contrato, y yo hablo de la ley.

Sr. Ministro del Interior—Véase la cuestión de las tarifas. No pueden entenderse con los arrendatarios.

Es una lucha permanente.

En el cálculo de las tarifas, allí se va un millón.

Además de todos esos inconvenientes, hay este otro: se calcula que hay 50,000 casas; á 6 pesos por casa, serían 3 600,000 pesos; quiere decir que estando á los términos del señor diputado.....

Sr. Olmedo—No hay más que 34,000 casas.

Un señor diputado—Pero dividen cada casa en departamentos.

Sr. Ministro del Interior—Para la aplicación de la tarifa, hay 50,000 casas. Y por eso digo: aun en los términos en que se pone el señor diputado, siempre sería una economía de un millón y medio de pesos.

Sr. Presidente—Se votará.

—Se vota el proyecto en general, y es aprobado.

—En discusión en particular el artículo 1º.

Sr. Centeno—Desearía conocer el origen de esta cantidad que expresa el artículo 1º. ¿Cómo se descompone?

Sr. Ministro del Interior—El gobierno ha recibido ya dos cuotas de la empresa arrendataria, de 7 millones de pesos cada una, que hacen un total de 14 millones. Hace dos años recibió la primera cuota, y hace un año la segunda; falta la tercera.

Los señores Baring pidieron que se les devolviera los intereses de ese dinero y además los dividendos que habían tenido que adelantar á los suscritores de estos 14 millones.

Y esto hace los 16 millones de que habla el artículo.

Pero me parece que está mal redactado. Dice: «con los intereses.» No, ya están comprendidos los intereses allí. De manera que el artículo debe decir que se les devolverá 16 millones.

—Se lee el artículo.

Sr. Lársen del Castaño—Podría ponerse: «y sus intereses.»

Sr. Olmedo—«Por capital é intereses», para que no haya lugar á reclamaciones.

—Se aprueba el artículo con la modificación propuesta por el señor diputado Olmedo.

—Entra en discusión el artículo 2º.

Sr. Centeno—Pido la palabra.

Es para solicitar del señor ministro tenga la bondad de indicarme á qué se refieren estas obras de ampliación, y en qué situación queda este triple servicio que representan las obras de salubridad de la capital. Es decir, cuál es la situación, ventajosa para la capital, en que serán llevadas á cabo.

Porque se trata de una suma apreciada en 11 millones; no sé si será la cantidad fija que habrá que pagar por estas obras de ampliación.

Sr. Ministro del Interior—Es poco más ó menos lo que la empresa va á tener que emplear para concluir completamente las obras, y dejarlas en buen estado de servicio.

Por el contrato de arrendamiento, como las obras estaban inconclusas, la empresa las tomó como estaban, obligándose á terminarlas. Lo que faltaba para terminar las obras está expresado en ese mismo contrato.

Es lo siguiente: sifón del Riachuelo, estanque de gravitación, conexiones externas, distrito de Boca y Barracas, techo de los filtros, duplicación de la casa de bombas, un caño del depósito distribuidor, una cisterna de bombas en el pozo núm. 11, las obras que no había concluido Devotto al recibirse de ellas la empresa, un distrito que faltaba no comprendido en el perímetro de las obras, calculado en 2.000,000. Todo esto hace un total de 8 524,000 pesos.

Estas obras han sido presupuestadas por ley, con estudios técnicos, con todos los requisitos necesarios para la mayor garantía de los intereses públicos.

A más de esto, por un contrato posterior, de julio, me parece, del año pasado, convino la empresa con el gobierno en hacer otras obras que se consideraba indispensables para el mantenimiento del buen servicio: un taller, duplicación de los depósitos de asiento, duplicación de los filtros, duplicación de la casa de bombas en Punta Chica, duplicación de la bomba del túnel de toma, tercer caño, desagüe de Berazategui.

De esto no hay un estudio técnico todavía, pero, hablando con los ingenieros, con

las personas que intervienen en estas obras, han sido calculadas de un millón y medio á dos millones de pesos; y esto, agregado á la suma anterior, es lo que se va á abonar á la empresa por la terminación de las obras.

Sr. Centeno—De manera que la empresa está obligada á entregar terminadas todas las obras?

Sr. Ministro del interior—Todas las obras, completas.

Sr. Centeno—Pero ¿estos servicios quedarán en condiciones de poder ser extendidos á Flores y Belgrano?

Sr. Ministro del interior—No, señor. El perímetro de las obras de salubridad no comprende Flores y Belgrano.

Sr. Centeno—Pero los elementos que se han acumulado pueden servir para hacer extensivo el servicio...

Sr. Ministro del interior—Se podrá extender el servicio de aguas corrientes, porque son muy considerables los elementos de depósitos, bombas y cañerías de que se dispone.

Todo está calculado como para dar agua á Flores y á Belgrano, incluso todas las fincas y quintas que estén fuera del perímetro actual de las obras de salubridad, las que llegan hasta el 11 de Setiembre, hospital de Caridad, Boca y Barracas.

Sr. Centeno—De modo que los servicios públicos de agua se podrán hacer gratuitamente?

Sr. Ministro del interior—Gratuitamente?... No se podrán hacer gratuitamente, porque hay que responder á estos créditos que contrae la nación.

—Se aprueba el artículo en discusión, así como el resto del proyecto.

—Se retira el señor ministro del interior.

Sr. Magnasco—Pido la palabra.

Siento mucho, señor presidente, tener que decir lo que voy á decir, y ruego á la cámara me dispense, porque es algo intempestivo, tal vez.

Ruego al señor presidente tenga á bien hacer constar en el acta mi voto en contra en esta cuestión, en general y en particular.

Voy á explicarme claramente.

Debo principiar declarando con toda franqueza que no he entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en la cámara.

Estos asuntos de tanta trascendencia, lanzados así no más, al debate, rozan facultades constitucionales, cuestiones financieras, económicas y hasta de salud pública...

Sr. Presidente—Debo observar al se-

ñor diputado que la ley está ya sancionada, y que no hay nada en discusión por el momento.

Sr. Magnasco—Es que deseo que en el acta consten los fundamentos de mi voto en contra.

Sr. Presidente—Perfectamente; se hará constar en el acta el voto negativo del señor diputado.

Sr. Magnasco—Si la cámara desea que no continúe, no continuaré.

Varios señores diputados—No hay nada en discusión.

Sr. Lagos (O.)—Hago moción para que se levante la sesión. *(Risas)*.

Sr. Mausilla—No podemos levantarla. Es muy corto lo que falta.

Con un poco de más paciencia, terminaremos. Y comeremos con más apetito.

Sr. Malbrán—Yo haría moción para que pasáramos á cuarto intermedio hasta mañana á las 3.

—Apoyado.

Sr. Gilbert—Estamos en sesión permanente, y no podemos interrumpirla.

Sr. Mansilla—Nadie responde que mañana haya número.

—Se rechaza la moción del señor Malbrán.

—Algunos señores diputados pasan á antecámaras.

Sr. Presidente—No hay número. Es necesario que los señores diputados se retiren.

Sr. Arias (I.)—El señor presidente debe hacer uso de su autoridad.

—Vuelven al recinto los señores diputados.

EXPROPIACION

(Faro en Punta Médanos)

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1º Declaráanse expropiables por utilidad pública dos hectáreas de terreno en «Punta Médanos», en la costa del sur, en la propiedad del señor Cobo, para la construcción del faro que debe colocarse en ese punto, quedando autorizado el poder ejecutivo para verificar la expropiación.

Art. 2º El gasto que origine esta expropiación se imputará á la ley de faros.

Art. 3º Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la sala de sesiones del senado, en Buenos Aires, á 22 de enero de 1891.

M. DERQUI,
Adolfo J. Labougle
Secretario.